

La consulta plantea que tratamiento específico debe otorgarse a un fichero creado por el consultante que contendrá datos de carácter personal, obtenidos de diarios y boletines oficiales, y estará disponible al público en un sitio web.

Según lo previsto en el artículo 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, constituyen un tratamiento de datos *“las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”*, por lo que la actividad objeto de consulta implica la realización de un tratamiento de datos personales sujeto a lo previsto en dicha Ley.

Dicho tratamiento de datos personales requiere el consentimiento inequívoco del afectado salvo que la Ley disponga otra cosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica. No obstante, el último inciso del artículo 6.2 recoge una excepción a la necesidad de consentimiento para el tratamiento de datos que resulta de interés para el supuesto que nos ocupa *“(...)cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.”*

Asimismo el fichero resultante de dicho tratamiento está destinado a hacer públicos sus contenidos, lo que constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como *“Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”*. Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo el artículo 11 de la misma Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el consentimiento del interesado (artículo 11.1). En este caso, igualmente, dicho artículo establece una excepción a la necesidad de consentimiento del interesado, *“cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.”* en su apartado 2.b,

En cuanto a que debe entenderse por fuentes accesibles al público, el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999 las define como: *“Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación”*.

Por consiguiente, el tratamiento y cesión de datos personales procedentes de diarios y boletines oficiales encuentra su legitimación en lo previsto en los artículos 6.2 y 11.2.b de la Ley Orgánica 15/1999, si bien debe tenerse en cuenta que el fichero resultante del tratamiento de datos recogidos de fuentes accesibles al público, en ningún caso tendrá tal carácter.

El responsable del fichero se halla sometido a las obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos, de manera que la creación del fichero deberá ser notificada a esta Agencia para su inscripción en el Registro General de Protección de datos, según lo señalado en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999. Asimismo, deberán adoptarse las correspondientes medidas de seguridad de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de dicha Ley y concordantes del Reglamento de desarrollo de la misma.

El hecho de que la Ley Orgánica 15/1999 permita el tratamiento de datos procedentes de fuentes de acceso público sin consentimiento, no supone que el afectado quede privado de otros derechos que le son reconocidos en dicha Ley, tales como el derecho de información o el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Así, en primer término, el artículo 5.4 obliga al responsable del tratamiento a informar de éste al interesado disponiendo que *“Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a, d y e del apartado 1 del presente artículo.”*

No obstante, cabe exceptuar esta obligación de información en los casos previstos en el apartado 5 del mismo artículo, según el cual *“No será de*

*aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando expresamente una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.”*

A estos efectos el Reglamento establece un procedimiento específico, en el artículo 153 y siguientes, previendo que en el escrito de solicitud se identifique el tratamiento al que pretende aplicarse la exención, se motive la imposibilidad o el carácter desproporcionado del esfuerzo, se expongan las medidas compensatorias, y se aporte una cláusula informativa que, mediante su difusión, en los términos que se indiquen en la solicitud, permita compensar la exención del deber de informar.

Por otra parte, la Ley Orgánica 15/1999, atribuye al afectado por un tratamiento de datos el derecho a utilizar un conjunto de mecanismos reactivos que constituyen una parte del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos. Estos mecanismos se concretan en los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en los artículos 15 y siguientes de la Ley.

En lo que se refiere a los derechos de rectificación y cancelación prevé el artículo 16.2 de la Ley Orgánica que *“Serán rectificadas o canceladas, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.”*

Debe señalarse que ambos derechos se encuentran vinculados al incumplimiento por parte del responsable del fichero, en este caso, el titular de la página web, de los principios consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, en particular los de actualización, exactitud y conservación, aunque la rectificación o cancelación puede proceder de la conculcación de cualquiera de los principios enumerados en dicho artículo, de este modo procederá otorgar el citado derecho cuando se esté produciendo el tratamiento de datos excesivos en relación con la finalidad que justifica aquél tratamiento, así como cuando los datos se estén empleando para fines incompatibles con el que justificó su recogida y tratamiento o cuando los datos hayan sido conservados y no cancelados por un período superior al derivado de la finalidad por la que se trataron o, evidentemente, cuando los datos no resulten exactos ni respondan, tal y como exige el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999 a la situación actual del afectado.

En el presente supuesto, en que los datos se tratan sin consentimiento del interesado, resulta especialmente relevante lo previsto respecto al derecho de oposición. El Reglamento de desarrollo la Ley Orgánica 15/1999 ha sistematizado los diferentes supuestos de oposición al tratamiento de datos, dispersos a lo largo de la Ley, disponiendo en el artículo 45. *"El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes supuestos:*

- a. *Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.*
- b. *Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.*
- c. *Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, en los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento."*

Por consiguiente, el afectado por el tratamiento de datos podrá ejercitar los derechos que la Ley Orgánica 15/1999 le concede, que no podrán denegarse cuando se produzca alguna de las circunstancias en que dicha Ley determina la posibilidad de su ejercicio, sin que el hecho de que los datos procedan de una fuente accesible al público constituya causa alguna de denegación de dichos derechos. Debe así recordarse que un tratamiento de datos hasta ese momento lícito puede devenir ilícito si no se atiende a las especiales circunstancias invocadas por el interesado al tiempo de ejercitar su derecho.

Añade el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 15/1999 que *"el interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada Comunidad autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación"*.

De esta manera, las personas físicas cuyos datos se encuentren en la página web a que hace referencia la consulta podrán ejercitar sus derechos de cancelación u oposición ante el titular de dicha página, derecho que deberá ser atendido en el plazo de 10 días señalado en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, y en el artículo 35 de su Reglamento respecto del derecho de



oposición, en otro caso, podrán recabar la tutela de esta Agencia en la forma prevista en el artículo 18 de la citada ley Orgánica.